

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por LUZ AMPARO IZQUIERDO RAMOS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-006-2019-00594-01).

Cabe anotar que este proceso es resuelto de manera preferencial en atención a la solicitud elevada por el apoderado de la entidad accionada, en la que manifiesta que a la accionante ya se le reconoció el derecho que pretende con este proceso judicial, adjuntando como sustento de su dicho la Resolución SUB 44609 del 17 de febrero de 2023.

ANTECEDENTES

La demandante solicita se declare que cumple con los requisitos de semanas exigidas por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez y, en consecuencia, se condene a la demandada a reconocerle y pagarle dicha prestación a partir del 1° de marzo de 2019, data en la que cumplió los requisitos exigidos por la norma; los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de

1993 o, en subsidio, la indexación de las condenas. Solicita además que se condene en costas a la entidad.

Como fundamento de lo solicitado, en síntesis, expuso que nació el 24 de mayo de 1960; según su historia laboral obtenida de la página web de la entidad accionada el 13 de agosto de 2019, tiene cotizadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones hasta el 1° de febrero de 2019, un total de 1.233,71 semanas; el 15 de noviembre de 2018 presentó ante la accionada solicitud de corrección de historia laboral; en vista de que no se recibía respuesta de la entidad, el 29 de enero de 2019 se presentó solicitud deprecando la pensión de vejez, la misma que fue negada por Colpensiones mediante comunicación con Radicado SUB 59367 del 11 de marzo de ese mismo año, con el argumento que solo tenía un total de 1.186 semanas; analizando el referido acto administrativo y comparándolo con la historia laboral obtenida de la página web, se evidencian una serie de inconsistencias en cuanto a faltante de períodos o imputación de pagos que disminuyen la densidad de semanas, las cuales en su totalidad alcanzan 66.86 semanas; en vista de lo anterior, el 1° de abril de 2019 se presentaron los recursos de ley; Colpensiones no adelantó las acciones tendientes a gestionar el cobro de los períodos no pagados por los empleadores, pues éstas no pueden estar a su cargo.

Colpensiones atendió en tiempo la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó los hechos que hacen referencia a la edad, las reclamaciones administrativas y los actos administrativos emitidos negando el derecho por no reunir la densidad de semanas. Niega la falta de reconocimiento de algunas semanas en la historia laboral y que asista razón a la actora para el reconocimiento de la prestación. Formuló como excepciones las de falta de causa para pedir, presunción de legalidad de los actos administrativos, falta de requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, prescripción, improcedencia de los intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas, buena fe y la innominada.

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, ABSOLVIÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES -COLPENSIONES-, de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora LUZ AMPARO IZQUIERDO RAMOS. ORDENÓ a la accionada que en el término de un mes a partir de que quede en firme la sentencia, proceda a validar en la historia laboral de la accionante por la empleadora María Aracely Zuluaga de Berrio, 30 días de cotización en los períodos noviembre y diciembre de 1998, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 1999; enero, febrero y diciembre de 2001; enero, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2002; enero y febrero de 2003 y enero de 2004. Con la empleadora Marina Castaño Cardona, validar 30 días de cotización en los períodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008. No impuso condena en costas.

La Sala conoce del asunto por los recursos de apelación formulados por las partes. Inicialmente el apoderado de la accionante manifiesta su disenso indicando que las semanas que se están ordenando incluir se encuentran entre folios 34 a 58, consistentes en todas las autoliquidaciones a las que se le imputó pago, agregando que el punto de partida debe de ser las 1233 semanas reconocidas más las 66.86 semanas que se están reclamando por no contabilizarse en debida forma. Manifiesta que, en el oficio de respuesta de la entidad, aparecen 13 semanas más después de haberse presentado la demanda, más las 58.28 semanas que se están imputando, descontando los 60 días a los que hace referencia el juzgado, y las 1233.71 semanas, nos da un total de 1304 semanas. Refiere que no es posible la negación del derecho a la accionante siendo que tiene cumplidas las semanas requeridas por la ley y, en este sentido, se le debió de reconocer el derecho a la pensión de vejez a partir del momento en que alcanzó las semanas mínimas exigidas, así haya sido posterior a la presentación de la demanda, por lo que, bajo esta óptica, podría reevaluarse la fecha desde la que se causan los intereses moratorios, siendo esta entonces igual data.

Por su parte, la apoderada de Colpensiones manifiesta su disenso frente a la orden del reconocimiento de los 30 días en varios períodos, para lo que hace una lectura de jurisprudencia concluyendo que en los casos de inconsistencias en las cotizaciones el trabajador debe demostrar la prestación personal del servicio, quedando probado con la historia laboral

que la actora no trabajó los 30 días completos del mes sino 15 días, por lo que el empleador solo pagó esos períodos, siendo eso lo que se le contabilizó en la historia laboral, sin que la parte demandante haya justificado con ninguna prueba que trabajó el tiempo completo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver los recursos interpuestos, se hace necesario indicar que Colpensiones, mediante memorial allegado de manera virtual el pasado 21 de febrero, señaló de manera textual lo siguiente:

“...aporto acto administrativo emitió (sic) por Colpensiones en el cual se reconoce la pensión de vejez de la señora Izquierdo Ramos Luz Amparo identificada con CC No. 43,042,330 por medio de en (sic) resolución SUB 44609 del 17 de febrero de 2023, a partir del 01 de agosto de 2022 en cuantía de \$1.000.000, es por lo anterior que se solicita la terminación del proceso, y absolución de las costas procesales a mi representada toda vez que ya están cubiertas (sic) todos los rubros solicitados en la demanda”

Bajo esta argumentación, esta Sala de Decisión Laboral analizará los términos en que le fue reconocida la prestación a la accionante, así como las demás pretensiones formuladas en el escrito de demanda que no hayan sido consideradas en el acto administrativo referido por la entidad accionada.

Frente al asunto, importa poner de presente que en la Resolución SUB 44609 del 17 de febrero de 2023, Colpensiones, luego de analizar el cumplimiento de los requisitos por parte de la actora, le reconoció el derecho a la pensión de vejez, teniendo en cuenta para ello que acreditó un total de 9,147 días laborados, que equivalen a 1,306 semanas, y que nació el 24 de mayo de 1960, por lo que cumplió los 57 años el mismo día y mes del año 2017. Así mismo, definió como mesada pensional el salario mínimo legal mensual vigente, la que le reconoció a partir del 1° de agosto de 2022, en

consideración del día siguiente a la última cotización al Sistema General de Pensiones.

Vistas así las cosas, poco hay por decir frente al derecho reconocido, por cuanto el debate en el de marras estaba centrado en la densidad de semanas que había alcanzado a cotizar la accionante en toda su vida laboral, quedando tal asunto resuelto en la ya referida resolución, a más de que ha sido postura pacífica y reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que el disfrute de la pensión de vejez es a partir de la desafiliación al sistema general de pensiones, en claro cumplimiento de lo señalado por los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, siendo evidente que la señora Luz Amparo Izquierdo Ramos efectuó su última cotización en el ciclo del mes de julio de 2022, a través de su empleador “*ALTERNATIVAS P&M SAS*”, y que el valor de la mesada pensional fue ajustada hasta alcanzar el salario mínimo legal mensual, por cuanto el IBL para el año 2022 se liquidó en la suma de \$868.425, que al multiplicarlo por la tasa de reemplazo generó como resultado \$564.476, cifra que resultaría inferior al salario mínimo del año 2022 que es de \$1.000.000 y, en gracia de discusión, si se le sumaran al total de semanas reconocidas las referidas en el recurso de apelación, las mismas no tendrían efecto sobre la mesada pensional, dado el poco efecto que tendrían sobre la tasa de reemplazo.

Para resolver sobre los intereses de mora deprecados, ha de analizarse en primera medida su procedencia o no, debiendo partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen en particular, se tiene que se encuentra vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, por manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la

entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho con respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, o porque la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, eventos en los cuales debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893 de 2015, SL2786 de 2020, SL3130 de 2020 y SL2790 de 2022).

Ahora bien, debe indicarse que según lo establece el artículo 33 de la referida Ley 100 de 1993, las administradoras de pensiones cuentan con un plazo máximo de 4 meses para resolver las solicitudes que sobre la prestación de vejez le radican sus afiliados con la correspondiente documentación que acredite el derecho.

En el caso bajo examen, la señora Luz Amparo Izquierdo Ramos presentó solicitud pretendiendo la pensión de vejez ante Colpensiones el 29 de enero de 2019, derecho que le fue negado mediante Resolución SUB 59367 del 11 de marzo de 2019, la demanda fue presentada el 13 de septiembre de 2019, notificada a la accionada el 14 de febrero de 2020, realizó su última cotización al Sistema de Pensiones en el ciclo del mes de julio de 2022, y la entidad le reconoció el derecho mediante Resolución SUB 44609 del 17 de febrero de 2023, a partir del 1° de agosto de 2022, esto es, pasados más de 4 meses del límite para resolver la solicitud que le fue presentada por la accionante, dando lugar entonces al reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos, los cuales liquidados por esta Sala de Decisión entre el 1° de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, dan como resultado la suma de \$980.965, cifra que deberá ser indexada a partir del 1° de abril de 2023 y hasta el momento del pago efectivo de la obligación.

Por lo anterior, se hace innecesario el análisis de los reparos formulados por la apoderada de la accionada, bajo el entendido que fue la misma entidad quien reconoció el derecho.

Así las cosas, habrá lugar a revocar la sentencia venida en apelación. Costas de las instancias a cargo de Colpensiones. Como agencias en derecho en esta se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente, por cuanto esta condena tiene un carácter objetivo, según lo señalado por el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación, en atención al reconocimiento de la pensión de vejez que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- le realizó a la señora LUZ AMPARO IZQUIERDO RAMOS, en los términos de la Resolución SUB 44609 del 17 de febrero de 2023 y, en consecuencia, se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- al reconocimiento y pago de la suma de NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$980.965) por concepto de intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, suma ésta que deberá ser indexada conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

Costas de las instancias a cargo de la demandada. Como agencias en derecho en esta se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500620190059401
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	LUZ AMPARO IZQUIERDO RAMOS
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	28/03/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario